

Derecho a ser elegidas o el cupo femenino

POR **MARÍA MONSERRAT LAPALMA** (*)

RESUMEN

En el marco de la temática sobre la Representación, cabe reflexionar sobre los diversos modos en que ha ido degradando el derecho de elegir en los comicios realizados. El último vivido en junio pasado lo ha llevado muy lejos hacia atrás.

Pero en este artículo me ocuparé de otro aspecto: el de ser elegido. Un derecho conquistado en la norma implicó por supuesto, hacerlo realidad y evitar que se lo tergiversara con prácticas anulatorias. En 1983 las mujeres empezamos a descubrir que se cercenaba esa parte del derecho político. Se inició así una nueva etapa. Empezó, entonces, el emprendimiento por conseguir una cuota obligatoria en la cobertura de lo cargos electivos.

Al discutir esa ley -24.012/ 1991-, hacia años que las mujeres ocupábamos lugares en los mundos públicos de lo laboral, de los derechos humanos, de lo académico, de lo artístico, de lo profesional, para que se nos siguiera considerando ineptas para la política. La cultura “patriarcal”, dominante, nos incluía a nosotras también. Nadie, ni individual ni colectivamente puede alcanzar un derecho si el impulso no nace de adentro.

La elegibilidad de las Mujeres, institucionalizada por las leyes de Cupos, ha sido devuelta por el poder político al campo de la sociedad civil -donde nació- por los diversos modos de incumplirla, y los otros poderes dominantes han silenciado el fenómeno.

Palabras Claves: Representación- Elegibilidad- Patriarcalismo- Participación.

THE RIGHT TO BE ELECTED OR WOMEN'S QUOTA

ABSTRACT

In the frame of Representation as a subject matter, it is worth to reflect on the different ways the right to elect has degraded along the elections. The last one, that took place this past June has carried it far behind.

But in this paper I will analyze another aspect: the right to be elected. A right achieved in the norm that demanded to come true and to avoid distortions by means of annulling practices. In 1983 women started to feel that that part of the political right was being retrenched. This gave place to a new stage. Women's work was, therefore, directed to get a compulsory quota for the elective posts.

By the time that law was discussed -24.012/ 1991- women had for years held sufficient relevant posts in public areas -labor, human rights, academy, arts, professions- to be considered inept when it came to politics. The dominant 'patriarchal' culture even included us. No one, neither individually nor collectively can achieve a right if there is no internal impulse.

Political power has returned women's eligibility, institutionalized in Quota laws, to civil society -where it was born- by the various ways to breach it, and the other powers silenced the fact.

KEYWORDS: Representation- Eligibility- Patriarchal Culture- Participation

DERECHO A SER ELEGIDAS O EL CUPO FEMENINO

Un día uno se despierta y se da cuenta a de que las libertades políticas básicas han sido abolidas de hecho, no necesariamente de derecho. Empiezan a pasar cosas que son casi moleculares: el sistema legal

(*) Profesora Ordinaria Titular de Derecho Político Cátedra III. Profesora de Posgrado; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP.

funciona sesgadamente, los jueces miran para un solo lado, se condona la violencia sobre gente que no merece consideración, ya sea Rosa Luxemburgo o algún villerito. Lo actores políticos y los liderazgos sociales miran para otro lado como si fuera algo que no les atañe. Algunas asociaciones son perseguidas o reprimidas, la libertad de prensa padece un sistema de censura de hecho, se piensa que la próximas elecciones vana ser fraudulentas y ese pequeño pero importante espacio de libertades que define a la democracia política en lugar de haber sido suprimido por un alzamiento miliar se fue perdiendo en un proceso más o menos largo Pero las consecuencias no son menos perversas."

O'DONNELL, Guillermo Entrevista realizada por Horacio VERBITSKY, Página 12, 15/octubre/2000

Inicio este artículo, como ha sido costumbre propia en trabajos académicos con un acápito, escrito hace algunos años, aunque podría no tener más de cuatro meses de producido.

Esto resulta así porque la temática de la Crisis global y las Instituciones políticas, si las referimos al proceso electoral de fines de junio del año que corre, mostró una de sus fases más despiadadas. Me ha conmovido con intensidad, aunque muchos de quienes estudiamos estos fenómenos.

Es cierto que hubo muchos alertas, sobre los que haré algunos señalamientos de

Ejemplos porque agotarlos llevaría más texto que el previsto. Al principio fue el copamiento de la Corte Suprema –revertido en forma parcial a partir del 2003– y de los órganos de Control, desde antes y hasta la actualidad (1) incluso el propio Consejo de la Magistratura, tanto el federal como los estatales. Todo para la construcción de un poder político que permitiera a un sector de la población, los que disputaron y obtuvieron la “representación” política, confundieran la gestión pública con sus negocios privados que la primera facilita, convirtiéndola en una forma profesional de vida. Cada informe anual de “Transparency Internacional” nos acerca al fondo de las estadísticas sobre corrupción. Y hay numerosos estudios, de afuera y del interior del país, que analizaron con vastedad esta cuestión.

Luego fue un lento proceso de torcer las voluntades que el pueblo expresaba en los actos comiciales, a través de los sistemas elegidos, a medida de los ocupantes del poder formal (2). Hemos visto todo, hasta el retroceso hacia formas de fraude del siglo XIX.

Aunque abunden las explicaciones sociológicas que remitan a la genética de nuestra aparición en la historia sobre el comportamiento de los agentes gubernamentales, desde los clásicos como Joaquín V. González –su tesis doctoral sobre “La Revolución”– o Juan Agustín Álvarez –“La Ciudad Indiana”– para quienes adherimos a la comprensión del derecho y por tanto al derecho político empezando por comprender la sociedad y la cultura donde aquel se produce y practica y no a los epifenómenos que lo rodean. Esto es, con autonomía relativa pero también variable en vinculación con esos otros factores socioculturales. Tomaré, en esta ponencia, la ruta que utiliza el Doctor Felipe FUCITO (3) a partir del modo en que fuera aplicado el derecho español en nuestra etapa colonial o simulada su aplicación cuando controvertía los intereses de quienes gobernaban.

La falta de respeto por la ley, en sentido amplio, como característica atada a la minuciosidad de su escritura y la mengua de su práctica, ligada a un espíritu aventurero de la época. Como ello persistió en el período de la independencia donde el derecho y la ley eran obra de la fuerza. Y siguió ese rumbo después de la organización que la heredó y no pudo someter los intereses que prevalecieron a la legalidad ni que ésta resultara un marco de igualdad para el conjunto.

Fuimos (¿Somos?) una sociedad violenta, con una cultura autoritaria por la fuerza que no termina de evolucionar, como han concretado otras sociedades de origen similar que lograron extirparla.

(1) VERBITSKY, Horacio: “HACER LA CORTE”, editorial Planeta Argentina S. A. I. C., Buenos Aires, octubre de 1993, Capítulo 1, páginas 15 a 30.

(2) LANATA, Jorge: “ADN. Mapa Genético de los defectos argentinos”, editorial Planeta S. A. I. C., Buenos Aires, 1ª edición, octubre 2004, Capítulos Una Cuestión de Plumas Y Somos Como Somos, págs 281 a 300.

(3) FUCITO, Felipe: ¿PODRÁ CAMBIAR LA JUSTICIA EN LA ARGENTINA?, Editorial Fondo de Cultura Económica –Colección Popular- Serie Breves– Buenos Aires, 1ª edición, julio de 2002, págs. 7 a 28.

Nuestra creencia nos lleva a idealizar y volver fetiche la norma jurídica como si obtenerla en su formulación fuera suficiente para hacerla valer.

Esta circunstancia general que, por supuesto, es mucho más amplia, será la base para entrar en la exposición que abarca en forma específica, el derecho de las mujeres a ser elegidas para representar la voluntad popular en los momentos en que sufragamos por representantes.

No solo me guía la idea de investigación sino la prueba empírica de haber participado en la gestación y en la gestión por el cumplimiento de lo que pasó a denominarse el “cupó” femenino. Evito “ab initio” la discusión sobre la llamada discriminación positiva porque está fijada en la Constitución, en la cúspide de la pirámide y se trata de ejecutarla. Además dejo de lado aquí el debate referido a la sociedad y cultura patriarcales. Nuestra vida colonial se inició con una violación masiva de las mujeres de los pueblos originarios. Los tomo como supuestos fácticos aceptados.

Recuerdo entre muchas otras mujeres y como pasaba en otras partes del mundo, a la platense *Julietta Lanteri*, la londinense *Alicia Moreau* que lucharon durante cincuenta años lo menos, para que pudiéramos obtener el derecho político de votar y ser electas, sin lograrlo. Se concretó esa utopía en 1947 con la sanción de la ley 13.010. Fue *Evita Duarte*, esa alma fuerte que, en poco tiempo de vida, subvirtió, desde lo social el lugar de otra/os en Argentina a mediados del siglo XX.

Un derecho conquistado en la norma implicó, por supuesto, hacerlo realidad y evitar que se lo tergiversara con prácticas anulatorias. Las diversas usurpaciones del poder sufridas en nuestro país nos privaron a todas y todos del derecho a elegir hasta recuperarlo en 1983. Allí las mujeres empezamos a descubrir que se cercenaba una parte del derecho político: el de ser elegidas. Se inicia así una nueva etapa. Empezó, entonces, el emprendimiento por conseguir una cuota obligatoria para la cobertura de lo cargos electivos.

Al darse la discusión sobre esa ley -24.012/ 1991-, hacía muchos años que las mujeres ocupábamos lugares en los mundos públicos de lo laboral, de los derechos humanos, de lo académico, de lo artístico, de lo profesional, para que se nos siguiera considerando ineptas para la política. No fue fácil. Porque la cultura “patriarcal”, dominante, nos incluía a nosotras también. Nadie, ni individual ni colectivamente puede alcanzar un derecho -respuesta a una necesidad- si el impulso no nace desde adentro de cada persona o de su colectivo.

Tuvimos que ir a nuestros orígenes, que nos mostraban luchando por la independencia. Desde la comandancia de Juana Azurduy a los salones de Mariquita Thompson por citar dos de las menos anónimas. La propia historia que la dictadura, como paradoja, puso en blanco sobre negro que, desde lo roles tradicionales de la familia, madres, abuelas, amas de casa tuvieron que enfrentarla. Las feministas, con sus variadas visiones, enseñaron a “poner y valorizar el cuerpo”, aunque llevó tiempo conciliar todas las diversidades. Los modos de organización que fueron horizontales para encarar la cuestión de lo heterogéneo, resultaron aportes fundamentales. El recurso a saberes y lenguajes femeninos permitió no ver como natural la discriminación y las mujeres nos acercamos a las otras exclusiones. Como la sufrida por los pueblos originarios que fueron los más victimizados en la historia nacional. Por eso el cupo resultó un caso de “*discriminación positiva*” para alcanzar la igualdad en el punto de partida.

Aunque omita citas que no resulten imprescindibles como las jurídicas, por creer que la mecánica de la escritura por una parte y, por la otra, la cultura significa la impronta de permanencia de ideas que a veces una haya olvidado de donde vienen y de que maestra o maestro las aprendió, quiero hacer una reflexión. La escuché de una científica social italiana que estaba trabajando en la Universidad Nacional de Rosario. La expuso en el Foro Internacional de la Mujer contra la Corrupción - Centro Cultural San Martín entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre del 2002-. Sentado que a Administración corrupta afecta al conjunto de los derechos humanos y ciudadanos porque, en ese camino, se pierden los económicos, sociales y culturales de mayorías y minorías por sustraerles recursos de financiamiento.- Por la relación con ese espacio que ya es el del poder estatal, la investigadora clasificó a las mujeres en tres categorías en su relación con el poder institucional. La primera fue la de aquellas

“con poder” –entendido éste como manejo de recursos económicos, ideológicos, etc. y más allá del “techo de cristal”, que pueden obtener obediencia o impunidad de los demás, incluido gobiernos. Propongo a quien esto lea, que piense los nombres de cinco que exhiban, entre nosotras y nosotros esas características. La segunda hablaba de las mujeres “del poder”, aquellas que gozan fundamentalmente desde el campo político, de los beneficios que su “amo patriarcal” le otorga. Así lo difunde. Son las familiares de derecho o hecho, que figuran en nuestras revistas del corazón, deportivas, de cualquier repercusión pública en los “más media” que construyen y reconstruyen esas personajes (¿por qué marca error en la máquina si la palabra carece de género, más allá de lo que mande la Academia?) para el consumo del conjunto de la población. Son más que las anteriores, son las que figuran en las listas de candidata/os para renunciar después (lo que han hecho de antemano), a cumplir conforme sus amos –pese a que alguna escape del corral y sea estigmatizada por la corporación- pero son pocas en el esquema planteado.

Y queda la última de las categorías, las “víctimas del poder” que incluye a la mayoría de las mujeres. Son las migrantes externas o del propio territorio, las “mulas” de la droga, cartoneras, las madres del paco, las relacionadas como esposas o concubinas que denuncian a hija/os violada/os por sus parejas, las que reciben o no un plan social y deben zanjar –sin los mínimos recaudos, fuera de los esquemas legales-, las falencias de la protección social requerida por la indigencia que, sin eufemismo, es hambre. La Teoría de las dos esferas resulta una explicación, una pública como asalariada más barata y una privada, como ama de casa como natural, significó la duplicación del trabajo femenino (4).

Dentro del derecho y en las situaciones paródicas que muestran nuestras normas, llegan las Constituciones. En 1994 se reformaron la Federal y la Provincial de Buenos Aires luego de otras modificadas en la mayoría de las Provincias. De tal modo, en lo formal, se convirtieron en derecho positivo muchas de las Convenciones y Pactos Internacionales en la cúspide de la pirámide jurídica (art. 31 CNA. y 1 de la CPBA.) específicamente sobre el tema de Derechos Humanos –que para la Mujeres fueron reconocidos como tales a partir de 1975, esa mitad de la especie ya sufragaban desde 1948-. Por tratarse de derecho humanitario, con supremacía sobre las leyes del Congreso (art. 75 inc. 22 CNA.). Quedó fijada la igualdad real de oportunidades para varones y mujeres, como asimismo las acciones positivas para posibilitarlas. Pero la Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación Femenina fue demorada y la única en su procedimiento, hasta el año 2007. Hubo una gran campaña de esclarecimiento y presión en el Senado para que el Protocolo resultara aprobado.

Al lado de las Constituciones Formales, sociales y democráticas, se edificó un sistema político, la Constitución Material que iba en el sentido opuesto aplicando el concepto de restauración que, fuera definido como *neoliberal* pero en realidad conservador de lo superado por el tiempo histórico. El estado huyó, empequeñecido a favor de lo que se denominara *globalización financiera*. La pérdida de soberanía estatal significó pérdida de ciudadanía. Las relaciones internacionales, regidas por la ley del mercado, golpearon a todos los países pero, en nuestra área – Como en el Poema Conjetural de Borges lo había hecho Narciso Laprida- descubrimos nuestro destino sudamericano. Entre los grupos más vulnerables estuvimos las mujeres con ese fenómeno realizado *femineización* de la pobreza.

Las sucesivas crisis de decadencia producidas en el país en el período 1976 /2003 tanto en la sociedad civil como en la política no han encontrado respuestas adecuadas ni tampoco los agentes que, en el ámbito de lo institucional, ayuden a superarlas.

En este marco vuelvo a hacer pivote en la tensión entre las Sociedades Civil y Política. Así será el abordaje *de la crisis de representación* en los dos ámbitos. Las preguntas a formular resultan de la comparación: ¿Las formas estructuradas dentro de la sociedad civil responden a las pautas de la representación concreta? Como limitación de ese punto, ha de considerarse aquellas organizaciones en

(4) CAVIGLIA, María Jorgelina: “MUJERES TRABAJADORAS, CAPITALISMO E IDEOLOGÍA VICTORIANA”, en Historia y Género: seis estudios sobre la Condición Femenina, editorial Biblos, Biblioteca de la Mujer, Departamento de Humanidades, universidad Nacional del Sur, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Buenos Aires, setiembre de 1999. Págs. 127 a 137

cuyo accionar interno predominen lo social propiamente dicho, lo cultural y lo económico; nacionales o internacionales, y vuelquen el mismo hacia el poder realmente existente -facultades de decisión en la afectación general-. Esto, de enorme fragmentación, ha sido invisibilizado por la acentuación recaída en el área política.- Ése es el campo donde han tenido expresión los movimientos sociales que, en forma provisoria, se denominarán de “nuevo cuño”.- Conviene advertir que ello tiene vínculo con la problemática que plantean como con los modos nuevos que presentan con otros que proveían desde más atrás en el tiempo.- Ahí ubicamos la interrelación con los aparatos del Estado, sus instituciones incluido el derecho y sus mediaciones como partidos y asociaciones políticas.

Apuntar a estos fenómenos implica también una doble visión.- La genérica que los visualiza como universales que, en etapa de globalización no puede obviarse, pero incluyendo lo particular determinado por las coordenadas de tiempo y espacio- Los efectos no resultan de idénticas causas ni sus resultados provocan reacciones semejantes, según el escenario de su aplicación.

Se mantiene siempre la postura asumida: todos los elementos estarán integrados en la teoría democrática, significando ello la reflexión teórica sobre la misma pero, además e inevitablemente, ahondar en las prácticas de la democracia, desde una posición crítica, sin exclusiones.

Conviene precisar que la crisis -las crisis- tienen referencia específica a una de las formas estaduales, la del Asistencial, en denominación acorde a nuestra realidad propia, más adecuada que la del Bienestar, pensada para los estados centrales.

Del mismo modo, al categorizar, tomo en cuenta que la crisis de representación, objetiva y profunda y de los representantes, subjetiva y menos honda que a veces aparecen mezcladas en el análisis. En este caso me preocupa en forma principal por el segundo aspecto.

En el estado actual de la cuestión corresponde anotar otro problema metodológico que apareja el anterior: tratar las mencionadas crisis como elementos separados (por responder a un criterio analítico conceptual y no a la realidad de cómo se presentan) de la formación política, a la sociedad civil y a la específica propiamente dicha. O, practicada la des-construcción, habrá que investigar las articulaciones que entre ambas se produzcan.

Ese vínculo entre las fuerzas de los agentes sociales y la de los políticos en su debilidad producen por un lado “anomia” y por el otro “omnipotencia” que lleva a la pérdida de representación y, en términos “weberianos” conduciría hasta la falta de legitimación. De allí partió el retorno de elites dictatoriales como ha sucedido en otras épocas de nuestra historia que, confío en señalar el problema como por otros caminos de resolución.

Las instituciones del estado, los aparatos de gobierno y los partidos políticos, gozaron de mayor tratamiento.- “Como si” la crisis de los representantes y de la representación fuera la única consecuencia en nuestro país.- La articulación entrambos, encerraría el “quid” de la cuestión (5).

Trato de aportar la posibilidad de equilibrar la participación y la representación para una parte de las soluciones para superar las paradojas entre teoría y práctica del sistema político. Encararlo conforme a los actores -individuales y colectivos- su accionar desde los diferentes escenarios de cruce, a la cultura formada en los tiempos y modalidades de los desafíos que se presentan.

Vaya un ejemplo práctico, en términos de ciudadanía.- Ante la pobreza, he dicho antes que afecta más a las mujeres, que hoy puede medirse en términos estadísticos, el Gobierno de un estado puede atenderla de dos modos diferentes: con una contribución para abolirla o con subsidio a la misma para mantenerla y reproducirla. La fórmula de avanzar (la política, en definitiva es transformación) es la abolición.

Del entramado de relaciones entre el reclamo y la respuesta, los partidos políticos de nuestro momento (con las excepciones, como siempre) han respondido con la primera solución y así aumentado

(5) LAPALMA, María Monserrat: LOS PRINCIPES ESTÁN DESNUDOS. Ponencia presentada al IV Congreso de Profesores de Derecho Político, Córdoba, setiembre de 2007.

la distancia con los electores (la elegibilidad ni puede ser encarada en esta situación).- No se exploró, seriamente, la posibilidad del segundo supuesto. Esto es la participación, en lugar de la representación pura sino se las coloca en contradicción.

Al adquirir permanencia, encarnar intereses e ideologías, produjeron el profesionalismo que los burocratizó y dio lugar a los primeros cuestionamientos. Se aprecia una fuerte tendencia a convertirse en sector especializado con rasgos de corporación. No buscarían el bien de la convivencia para mantener el sistema como tal sino el medio para realizar sus intereses particulares. De ahí la calificación de “casta política”.

Incorporados al derecho constitucional antes y después en las Provincias y al orden federal en 1994, como únicos instrumentos de selección de gobernantes, sus luchas internas y externas; la competencia ha agravado el tema de la corrupción que viola el derecho humano y ciudadano a una buena administración de la cosa pública. Tal fenómeno, como relación de intereses privados y/o políticos y la función pública por la que los funcionarios son influenciados con estímulos económicos o de otro tipo para actuar, a favor de esos intereses fuera de los estándares normativos, éticos o legales. Y con impunidad. El sistema representativo se vincula entonces con sus agentes partidarios y quedó en conflicto con la vieja y con las nuevas ciudadanías.

Hoy día, ante la fragmentación de los partidos y la formación de verdaderas -U.T.E

“Uniones Transitorias Electorales” – como recuerdo que las denominó el colega Ricardo DEL BARCO, los discursos partidarios piden el retorno a las tradiciones bipartidistas, propongo otra reflexión manifestada en otra oportunidad: Los partidos políticos resultan productos históricos surgidos por las necesidades de los grupos sociales que los impulsaron en sus orígenes y transformaciones.- Tal vez habría que pensar en que pueden desaparecer, habría que profundizar en las nuevas formulaciones que pueden surgir, si aplicamos los oídos a la tierra donde transcurren los cambios.

Es la opción por la sociedad civil, el uso de los espacios públicos que se mueven y cambian. “La política institucional es la de los profesionales de la política, de los partidos y los funcionarios, la *meta-política* es estar del lado del ciudadano, del “movimiento ciudadano”, eso que, en definitiva, hace un individuo cuando se rebela ante el poder de la fuerza (porque no es poder, es fuerza, acoto). El poder se genera solo comunicativamente” (6).

En ese marco es donde hago pie para volver al tema del cupo. Recordar en primer término que la pragmática de su aplicación fue conflictiva desde el principio. Norma ALLEGRONE, en el año 2002 propuso y sistematizó alguno de los casos que llegaron a los Jueces (7). No se pudo continuar dichas publicación. Agrego, como anexo 1 la presentación realizada por María Teresa MESCIADRI DE MORINI que por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obtuvo lo que su partido, y la Justicia Argentina le habían negado como derecho Pero las presentaciones de los listados –me refiero a las categorías que afectan a los bonaerenses en especial- muestran un fuerte retroceso muy generalizado. Quienes habrán de resolverlos, si los responsables de las presentaciones no lo concretan como debieran hacerlo, están abocados a impugnaciones generales, de Asociaciones Cívicas o de Mujeres, particulares de las afectadas, además de otras cuestiones no relacionadas con la cuota. Es grave por cuanto elegiremos legisladores, nacionales, provinciales y locales que empiezan por desconocer o violar las propias leyes que se han votado. Destaco, para el acto electoral realizado el 28 de junio que, en la Provincia de Buenos Aires regían las leyes 5109 y 11.733 que fijan en un 30% los cupos mínimos que hombres y mujeres deben ocupar como piso en la competencia. Y que, para los nuevos frentes, alianzas, acuerdos o como decidan la denominación, por no poder contabilizarse

(6) CANSINO, Cesar: “LA MUERTE DE LA CIENCIA POLÍTICA”, Premio Ensayo 2008, L Nación, editorial Sudamericana, 1ª edición, Buenos Aires, octubre de 2008; pág. 255.

(7) ALLEGRONE, Norma: “Ley de CUPO FEMENINO- su aplicación e interpretación en la República Argentina”, editado por Fundación para el Desarrollo en Igualdad FUNDAI y Fundación FRIEDRICH EBERT; Buenos Aires, año 2002.

las anteriores para las presuntas, la ubicación tiene que ir intercalada desde la cabeza. Una y Uno; Uno y Una. Hubo incumplimiento generalizado. En junio pasado la diversidad de discusiones sobre adelantamiento de fechas, candidaturas testimoniales, listas colectoras o espejos, fraudes presuntos, robo de boletas, etc. insumieron horas de debates en los medios de ¿comunicación?, juzgados y tribunales electorales, desplazando las propuestas. Excepto lo referido a la cuota...que no tuvo otra calificación que la de “chicana”. Tampoco alcanzó difusión pública la reducción, una vez más, de la proporción de votantes.

Hay que cuidar el “Estado de Derecho”. Pero ¿cuál derecho? ¿El impuesto por quién? ¿El aplicado por quién?

“Democracia” demandan los pueblos, y “democracia” ofrecen las clases dominantes. Pero ¿cuál democracia? ¿Acaso la que consigue impedir los cambios legislativos favorables a los pueblos que integramos las Mujeres?

La elegibilidad de las Mujeres, institucionalizada por las leyes de Cupos, ha sido devuelta por el poder político al campo de la sociedad civil -donde nació- por los diversos modos de incumplirla, y los otros poderes dominantes han silenciado el fenómeno.

La representación como vía a la participación, comenzará a crecer de la crisis cuando los representados crean en su práctica y no en su mero discurso.

La Plata, diciembre de 2009

María Coro

Anexo 1

Casos declarados admisibles

INFORME N° 102/99

CASO 11.307 MARÍA MERCIADRI DE MORINI ARGENTINA 27 de septiembre de 1999

I. RESUMEN

1. El 15 de junio de 1994 la señora María Merciadri de Morini (en adelante “la peticionaria”) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, la “Comisión Interamericana” o “CIDH”) en la cual alega la violación de los derechos al debido proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a los recursos efectivos (artículo 25), establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o la “Convención Americana”) por parte de la República Argentina (en adelante el “Estado”, el “Estado argentino”, o “Argentina”) en su propio prejuicio.

2. La peticionaria alegó que en la lista electoral de seis candidatos del partido Unión Cívica Radical para diputados nacionales de la Provincia de Córdoba, se colocó a una mujer en el cuarto y a otra en el sexto puesto. Con ello se violó la ley 24.012 y su decreto reglamentario No. 379/93, por los cuales debió haberse colocado a dos mujeres dentro de los primeros cinco puestos. La peticionaria interpuso los recursos internos disponibles ante las autoridades judiciales, las cuales además de rechazar su petición, rechazaron su legitimación para actuar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación presentada después que se habían efectuado las elecciones y el mencionado partido político había ganado cuatro puestos de los seis para los que se había presentado. Como fundamento de su rechazo señaló que “en las elecciones del 3 de octubre de 1993, la Unión Cívica Radical había obtenido un caudal de votos que le había consagrado cuatro diputados nacionales y en la causa se disputaba quién debía haber ocupado la quinta candidatura”. El Estado señaló que en el presente caso se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna y solicitó a la Comisión que declarara la inadmisibilidad de la petición porque los hechos alegados no configuran violación de ninguno de los derechos establecidos en la Convención.

3. Al examinar la admisibilidad de la petición, la Comisión concluyó que tiene competencia para conocer este caso y que es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

I. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La peticionaria presentó su petición ante la Comisión el 15 de junio de 1994, la cual fue remitida al Estado el 16 de junio de 1994. La Comisión recibió respuesta del Estado el 9 de enero de 1995, la cual fue transmitida a la peticionaria el 18 de enero de 1995. La peticionaria envió sus observaciones el 27 de febrero de 1995, las cuales fueron remitidas al Estado el 1 de marzo de 1995. El Estado solicitó prórroga y respondió el 4 de mayo de 1995. La peticionaria presentó sus observaciones el 5 de junio de 1995. El Estado contestó el 10 de agosto de 1995. El 11 de octubre de 1995 la peticionaria remitió una nueva comunicación reiterando posturas anteriores. La peticionaria, envió el 17 de noviembre de 1997 una carta en la que reitera la denuncia y solicita el pronto despacho de la Comisión, acompañando otros fallos en otras causas que sustentarían su decisión. La Comisión acumuló esta información adicional en el presente caso por la analogía de los alegatos planteados. Con fecha 3 de diciembre de 1997 se remitió dicha comunicación al Estado. El 18 de febrero de 1998 se recibió la respuesta del Estado, la cual fue remitida a la peticionaria el 24 de febrero de 1998. El 31 de marzo de 1998 se recibieron las observaciones de la peticionaria, las cuales fueron remitidas al Estado el 26 de mayo de 1998.

III. POSICIONES DE LAS PARTES

A. La peticionaria

5. La peticionaria alegó que el partido político Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba había conformado de común acuerdo entre sus dirigentes la lista de seis candidatos a diputados nacionales, para la elección del 3 de octubre de 1993, colocando en los puestos tercero y sexto a dos mujeres, sin tener en cuenta que el mencionado partido sólo renovaba a cinco diputados nacionales. Con esto se configuró la violación de la ley 24.012, llamada Ley de Cupo, la cual garantiza que un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) de los cargos electivos de las listas de los partidos políticos debe ser cubierto por mujeres, “en proporciones con posibilidades de resultar electas”. Por otra parte, el artículo 2 del decreto No. 379/93, que reglamenta la ley, detalla que “el treinta por ciento de los cargos a integrarse por mujeres, según lo prescrito por la ley 24.012, debe interpretarse como una cantidad mínima. En los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determinara fracciones inferiores a la unidad, el concepto de cantidad mínima se regirá por la tabla que como anexo “A” integra el presente decreto”, y el mencionado anexo dice: “cargos a renovar, cinco; cantidad mínima: dos”.

6. Con estas normas, se está creando la obligación para los partidos políticos de confeccionar sus listas de candidatos de acuerdo con esa ley y su incumplimiento acarrea su no oficialización¹. Así mismo, también se crea el derecho correlativo de los ciudadanos, investidos del derecho constitucional de sufragio², de votar por las listas de candidatos que estén integradas por mujeres en la forma que dicha norma establece.

7. La peticionaria adujo que si la lista del partido Unión Cívica Radical no se ajusta a lo que dispone la ley, está restringiendo y vulnerando el derecho del sufragante que nace de ella con el objeto de asegurar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos. El perjuicio consiste en privar al ciudadano de votar por una lista del partido de su preferencia conformada con arreglo a las disposiciones legales, y obligarle a votar por una lista que no se ciñe a dichas normas, violando así el pleno ejercicio de sus derechos políticos. La peticionaria considera que por ello no puede negársele al ciudadano elector la legitimación para requerir que dicho derecho sea respetado.

8. La peticionaria alegó que en su carácter de ciudadana afiliada a dicha agrupación política impugnó la lista ante la Junta Electoral, la cual fue rechazada el 20 de mayo de 1993 considerando “que la lista de candidatos surgió del consenso de todos los Núcleos del Partido, que acordaron una lista

única". Tras apelar dicha decisión, el 22 de junio de 1993 la justicia federal rechazó su solicitud y aceptó la excepción de falta de legitimación para actuar en el presente caso, la cual había sido opuesta por la contraparte. La peticionaria apeló esta última decisión y la Cámara Federal Electoral rechazó la apelación el 13 de agosto de 1993. El 26 de agosto de 1993 presentó el recurso extraordinario, el cual fue rechazado el 7 de octubre de 1993, con fundamento en que la elección había tenido lugar el 3 de octubre de 1993 y la cuestión se había vuelto abstracta. El 18 de octubre de 1993 la peticionaria interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue desestimado el 2 de diciembre de 1993 con el argumento de que "en las elecciones del 3 de octubre de 1993, la Unión Cívica Radical había obtenido un caudal de votos que le había consagrado cuatro diputados nacionales y en la causa se disputaba quién debía haber ocupado la quinta candidatura."

9. La peticionaria consideró que las autoridades judiciales argentinas debieron decidir conforme a derecho y que la cuestión "no era abstracta". Al respecto, señala que debe reconocerse el "derecho en expectativa," bien "concreto," para ser diputado nacional en el caso de que se produjera una vacante entre los elegidos. Si se produce la vacante, ascendería un varón -el que está en el quinto lugar- y no una mujer como le correspondería. Por ello, considera que en el presente caso debió haberse colocado a una mujer en el quinto puesto y a un hombre en el sexto lugar. Así mismo, consideró que aún en el caso de cuatro cargos a renovar, deben elegirse dos mujeres, porque una sola mujer representa el 25%, inferior al cupo legal. En consecuencia, no pueden colocarlas en cualquier lugar de la lista, sin tomar en consideración el número de puestos que se renovarán.

10. La peticionaria también alegó que la Cámara Federal Electoral rechazó su legitimación para actuar al exigirle un interés propio que no aclara -puede ser económico, social, político, etc.- sin advertir la trascendencia de la cuestión que interesa a todos por igual. Con ello, se violaron sus derechos y adujo que toda persona tiene derecho a presentar una impugnación sin que sea necesario que se trate de una persona perjudicada con motivo del lugar que ocupe en las listas electorales.

11. Así mismo, considera incomprensible la clásica exigencia del derecho subjetivo violado o del interés concreto desconocido, sobre todo a partir de la decisión del más alto tribunal de Argentina en el caso *Ekmekdjian c/Sofovich*.³ También la peticionaria consideró que hay que tener en cuenta que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos No. 23.298 reconoce específicamente la personalidad de los afiliados de los partidos políticos reconocidos "cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la Carta Orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias".

12. La peticionaria alegó que el Estado había violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana porque el tribunal de primera instancia había considerado que no tenía legitimación para actuar. Así mismo, consideró que al rechazar su demanda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había violado el principio de igualdad protegido en el artículo 24, lo que implica a su vez un cercenamiento de los derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana.

13. En presentaciones posteriores, la peticionaria anexó otro caso análogo y posterior al presentado en su petición original. Concretamente, a título ilustrativo, in mayo de 1995 acoger sus pretensiones ordenando ascender a la mujer al quinto lugar y desplazando al varón al sexto. La peticionaria alegó que esta decisión quedó firme a su favor cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de apelación intentados por la contraparte.

14. Por otra parte, la peticionaria también presentó ante la Comisión la causa iniciada por María Florentina Gómez Miranda, que "tiene como objeto demostrar que siguen vigentes los motivos para peticionar sic. Así mismo, invoca otro caso en donde la Cámara Electoral oficializó la lista con el veinticinco por ciento de mujeres con posibilidad de resultar electas del mismo partido político de la Provincia de Córdoba para las elecciones del 26 de octubre de 1997. En este último caso, la peticionaria afirmó que no había agotado los recursos internos.

B. El Estado

15. El Estado alegó que en este caso se habían agotado los recursos internos pero que la petición era inadmisibile por no caracterizar hechos violatorios de la Convención. En cuanto al fondo, el Estado

señaló, en primer lugar, que las listas de candidatos que se presentan a los actos electorarios, además de ser convalidados por la autoridad judicial electoral antes de los comicios, son convalidadas en su conformación por el voto popular. Por ello, no podía ofrecer alternativa alguna sin conculcar de alguna manera la expresión de la voluntad popular en las urnas.

16. A los fines de demostrar que sí se respetaban los derechos de la mujer en las listas electorales, el Estado anexó otras decisiones sobre causas iniciadas por la peticionaria, donde la Cámara decidía que el partido político Unión Cívica Radical debía modificar las listas con el objeto de incluir dos mujeres entre los cinco primeros lugares, antes de presentarlas a la justicia nacional electoral. Concretamente, anexó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral de fecha 30 de marzo de 1995 revocando la sentencia de fecha 21 de diciembre de 1994 del Juez Federal con competencia electoral de la ciudad de Córdoba en el caso “Merciadri de Morini, María Teresa s/representación”. La decisión del tribunal en ese caso consideró que “el cupo del 30% debe ser en proporciones con posibilidades de resultar electas, lo que debe entenderse con posibilidades reales o efectivas”. Así mismo, se reconoció la legitimación a la peticionaria e hizo saber a la Justicia Nacional Electoral que a los efectos del artículo 60, primer párrafo, del Código Electoral Nacional que deberán figurar dos mujeres entre los cinco primeros lugares.

17. En segundo lugar, el Estado alegó que no corresponde a la Comisión examinar la integración de las listas de candidatos electorales. Asimismo señala que dicha integración no puede entenderse como violación de alguno de los derechos establecidos en la Convención. El Estado también alegó la doctrina de la cuarta instancia, por la cual la Comisión no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar los supuestos errores de hecho o de derecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.

18. En presentaciones posteriores, el Estado anexó casos donde se evidenciaba el respeto de los derechos de las mujeres ante la justicia electoral. Así mismo, el Estado señaló que en el transcurso del trámite ante la Comisión la peticionaria había introducido cuestiones ajenas a su petición original, tales como la causa de María Florentina Gómez Miranda; el incidente similar en las elecciones de 1997, en el cual consideró que no se habían agotado los recursos internos; y en la tercera causa presentada, señaló que las autoridades judiciales habían decidido de manera favorable a la peticionaria, quedando satisfecha su pretensión ante las instancias internas.

19. El Estado alegó que desde el 24 de agosto de 1994 rigen las reformas introducidas a la Constitución Nacional que, en el nuevo artículo 37 *in fine*, dispone la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, la cual se garantizará por acciones positivas en la regulación de partidos políticos y en el régimen electoral.

IV. ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD

A. Competencia *ratione temporis*, *ratione materiae*, *ratione personae* de la Comisión

20. La Comisión tiene competencia *ratione temporis* [en razón del tiempo] para conocer el presente caso, por cuanto, en primer lugar, el peticionario sostiene que el Estado argentino es responsable internacionalmente con motivo de la decisión dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de diciembre de 1993, la cual tuvo lugar una vez que el Estado había consignado el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 5 de septiembre de 1984 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

21. En segundo lugar, con relación a la competencia *ratione materiae* [en razón de la materia] la petición inicial denuncia presuntas violaciones de los derechos consagrados en los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana.

22. En cuanto a la competencia pasiva *ratione personae* [en razón de la persona], el peticionario atribuye violaciones a un Estado parte, en este caso Argentina. Con relación a la competencia activa *ratione personae* [en razón de la persona], el peticionario alega que dichas violaciones se cometieron en su propio perjuicio y se presentó como víctima directa de dichas violaciones.

B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición

a. Agotamiento de los recursos internos

23. La regla de la previa interposición y agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, establecida en el artículo 46 (1) (a) de la Convención, dispone que toda petición formulada ante la Comisión debe haber sido conocida previamente, en sustancia, ante las instancias internas. Esta regla permite a los Estados solucionar previamente las cuestiones planteadas dentro de su propio marco jurídico antes de verse enfrentado a un proceso internacional.

24. En el presente caso, la Comisión nota que la peticionaria interpuso los recursos internos con la presentación de la demanda con motivo de la omisión de un puesto para las mujeres en la lista del partido político Unión Cívica Radical presentando los candidatos para las elecciones del 3 de octubre de 1993. Una vez que la peticionaria presentó los recursos de apelación ordinarios y extraordinarios ante las autoridades judiciales nacionales, la demanda fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado consideró que en el presente caso se habían interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 (1) (a) de la Convención Americana. Por las razones antes mencionadas, la Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

b. Plazo para presentar una petición ante la Comisión

25. El artículo 46 (1) (b) de la Convención establece como requisito para la admisibilidad de una petición que haya sido presentada dentro del plazo de los seis meses a partir del momento en que el peticionario haya sido notificado de la decisión definitiva. La Comisión observa que la sentencia definitiva fue dictada el 2 de diciembre de 1993 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La petición fue presentada ante la Comisión el 15 de junio de 1994, dentro del plazo de los seis meses. La Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

26. Con relación al requisito de que la petición no se halle pendiente de decisión por otro organismo internacional, establecido en el artículo 46 (1) (c) de la Convención, la Comisión no ha recibido información que indique que esta circunstancia esté presente. Por lo tanto, la Comisión considera que se ha cumplido con él. Por otra parte, la Comisión también concluyó que se ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 47 (d), por cuanto esta petición no es la reproducción de una petición ya examinada por la Comisión ni ha sido decidida por otro organismo internacional.

d. Caracterización de violaciones

27. El artículo 47(b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisile toda petición o comunicación cuando “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”. La peticionaria ha alegado que con motivo de las decisiones de las autoridades judiciales argentinas, el Estado ha violado el derecho al debido proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a los recursos efectivos (artículo 25) de la Convención. La Comisión considera que los hechos expuestos por la peticionaria, de ser ciertos, podrían configurar violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión concluye que se ha cumplido con este requisito.

V. CONCLUSIONES

28. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

29. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE:

1. Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a las presuntas violaciones a los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana;

2. Notificar esta decisión a las partes;
3. Continuar con el análisis de fondo de la cuestión;
4. Ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad, y
5. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington. D.C. a los 21 días, del mes de septiembre de 1999. (Firmado): Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; y los Comisionados Carlos Ayala Corao, Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé.

1 La peticionaria invoca el artículo 60, segundo párrafo “in fine” de la ley 24.012.

2 La peticionaria invoca el artículo 37 de la Constitución de la Nación el cual garantiza “el pleno ejercicio de los derechos políticos”.³ Esta decisión dictaminó, entre otros particulares, sobre el rango que tienen los tratados internacionales de derechos humanos en la Argentina.

4 Expediente No. 1836/95.

5 Expediente No. 2779/96.

6 Comunicación recibida el 2 de abril de 1998.

BIBLIOGRAFIA

ALLEGRONE, Norma: *“Ley de cupo femenino: su aplicación e interpretación en la República Argentina”* Editado por FUNDAI –Fundación para el Desarrollo en Igualdad y FRIEDRICH EBERT STIFTUNG; Buenos Aires, 2002.

CANSINO, César: *“La muerte de la ciencia política”* Premio Ensayo 2008, La Nación., Sudamericana; Buenos Aires, 2008.

FUCITO, Felipe: *¿Podrá cambiar la justicia en la argentina?*: Fondo de Cultura Económica; Buenos Aires, 2002. [Popular; 608, Breves

LANATA, Jorge: *“ADN- Mapa Genético de lo Defectos Argentinos”*, Planeta; Buenos Aires, 2004.

VERBITSKY, Horacio: *“Hacer la Corte- La construcción de un poder absoluto sin justicia ni control”*, Planeta, Buenos Aires, 1993. [Espejo de la Argentina]

VILLAR Daniel, DI LISCIA, María Herminia, CAVIGLIA, María Jorgelina (Editores): *“Historia y género – Seis Estudios sobre la condición Femenina”* Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur e Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. Biblos; Buenos Aires, 1999. [Biblioteca de las Mujeres] ♦